



CARLOS SAN JUAN MESONADA

PROFESOR TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III

Alternativas de la PAC ante la liberalización arancelaria

El contexto mundial de creciente liberalización de los intercambios de los productos agrarios surgido del Acuerdo de Marrakech ha condicionado la reforma de la PAC. Pero la atención se ha centrado en negociar los niveles de protección de la agricultura europea en términos de equivalentes arancelarios. Implícitamente, esto supone admitir la estabilidad monetaria, especialmente la estabilidad de los tipos de cambio de las monedas europeas, en una visión optimista de la eficacia de los mecanismos del SME (Sistema Monetario Europeo).



SIN embargo, los últimos acontecimientos están demostrando que las turbulencias monetarias tienen efectos sobre los niveles de protección frente al exterior y respecto a la traducción a moneda nacional de los precios de garantía fijados en ecus que no son los previstos. Incluso pueden ser de signo contrario.

En estas circunstancias, una vez más, las transformaciones agrarias van a ser el resultado de unas fuerzas externas a la propia PAC diseñada que la modifican de hecho y con un alcance difícil de predecir. El objetivo de la moneda única no debe ser motivo para dejar de prestar una atención prioritaria a los temas agromonetarios, a pesar del escaso debate que origina su complejidad técnica. En este artículo se presentan los resultados que las turbulencias monetarias han tenido en los niveles de protección frente al exterior de la agricultura europea, comparándola con la del resto de los países de la OCDE.

La reciente reforma de la PAC ha venido condicionada por la necesidad de llegar a un acuerdo en el seno del GATT. Por tanto, ha debido valorarse y justificarse frente a la alternativa seguida en otros países «anglosajones no europeos» (EE.UU., Australia, Nueva Zelanda, Canadá) con sistemas de apoyo basados en las ayudas directas más que en políticas de precios.

Las políticas de precios consisten en intervenciones en el mercado para alterar el precio de equilibrio al que se llegaría mediante el libre juego de la oferta y la demanda.

Las ayudas directas consisten en intervenciones para modificar la renta de los agricultores, bien sea por la alteración de sus ingresos (subvenciones a la producción, indemnización compensatoria [defi-

ciency payment], generación de bienes públicos, transferencias, aranceles a las importaciones equivalentes, etc.) o de sus gastos (subvenciones de explotación, tipos de interés subvencionados y otras formas de financiación privilegiadas [períodos de carencia de los préstamos, líneas específicas, coeficientes de inversión obligatorios...], etc.).

El verbo «estabilizar» ha sido utilizado eufemísticamente por los Gobiernos para describir medidas diseñadas tanto para sostener los precios percibidos por los productores como para moderar su crecimiento en períodos de fuertes alzas en los mercados mundiales (Ritson, 1977, p. 337).

En el primer caso, sostener los precios por encima de los de equilibrio competitivo, la intervención persigue aumentar los precios percibidos por los agricultores para mejorar así sus ingresos e indirectamente incrementar la producción y estabilizar los precios.

Las intervenciones como las practicadas en las OCM's (Organizaciones Comunes de Mercado) de la UE se justifican usualmente por:

1. La conveniencia de garantizar unos ingresos mínimos a los productores.
2. La necesidad de promocionar determinadas producciones por razones «estratégicas», como mejorar el autoabastecimiento nacional.
3. Las ventajas de estabilizar el precio de mercado.
4. Asegurar los suministros, ya que: a) la estabilización debería permitir a los productores adversos al riesgo maximizar su beneficio esperado; b) como las decisiones sobre niveles de producción se toman teniendo en cuenta el precio esperado, los errores de predicción provocados por las fluctuaciones de los precios pueden llevar a desviarse de las condiciones Pareto óptimas (Miller, 1977), o generar cambios de



precio que se alejan del de equilibrio en un esquema de telaraña (Grandal, 1986).

5. La necesidad de equiparar las rentas de los productores con la renta per cápita.

Estas intervenciones de sostenimiento de niveles mínimos de precios redistribuyen la renta en favor de los productores y en contra de los consumidores, que pagan precios más altos que en ausencia de intervención, y de los contribuyentes, que financian con más impuestos los incrementos de los gastos para intervenir en el mercado.

En realidad, este tipo de intervención equivale a un impuesto sobre los consumidores y una subvención a los productores. Si suponemos que los productores son relativamente más pobres que los consumidores y que el sistema fiscal que recauda los impuestos es progresivo, entonces los efectos redistributivos son progresivos. En España, los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares de 1990 indican que esta suposición es correcta. Por tanto, la política de precios es progresiva como redistribuidora de renta.

Efectos indeseables de la intervención en precios

En las intervenciones para mantener el precio por encima del de equilibrio, la cantidad ofertada supera a la demandada, y el excedente de producción debe ser comprado por el organismo de intervención. La visión microeconómica de los gráficos de oferta y demanda sólo recoge los aspectos estáticos, o de estática comparativa, del problema. Si la situación es duradera en el tiempo, el organismo de intervención acumula excedentes incurriendo en costes de almacenamiento, transporte, financiación de stocks y gastos de gestión.

Si la economía es abierta, la intervención en el mercado interior debe ir acompañada de un sistema de aranceles que grave las importaciones para elevar el precio internacional hasta el nivel del precio interior. Para las exportaciones se usan fórmulas como las restituciones a la exportación para poder dar salida al mercado internacional, donde los precios suelen ser inferiores, a los excedentes que no pueden ser absorbidos por el mercado nacional. Esto perjudica a terceros países, que no solamente ven restringido su acceso al mercado interior, sino que, además, sufren la caída de precios de los mercados internacionales si el volumen de excedentes es suficientemente grande (Josling, 1981).

El FEOGA-Garantía (Fondo Europeo de Ordenación y Garantía Agraria), con la venta de excedentes en los mercados internacionales (como en los casos de la carne, cereales, lácteos...), ha provocado la desestabilización de los precios internacionales, con efectos indeseados en terceros países.

Por otra parte, los críticos del sistema de sostenimiento de precios señalan el fracaso de estas políticas para evitar el deterioro de la renta media de los productores y los efectos redistributivos perversos interempresariales (Miller, 1987).

Precios y costes de producción

El coste medio (por unidad de producto) de cada empresa del mercado no tiene por qué ser igual. Por tanto, como el ingreso medio sí será igual para todas las empresas que vendan un producto homogéneo al precio de intervención, el margen bruto por unidad vendida es diferente.

En estas condiciones, las empresas con menores costes medios pueden obtener mayores márgenes brutos por unidad vendida. Si además venden mayores volúmenes, su masa de excedentes monetarios será mayor. En el largo plazo, este

tipo de empresas acaban accediendo a economías de escala, frecuentemente mediante la adopción de tecnologías que permiten aumentar la productividad y hacer bajar más los costes de producción.

Cuando existe progreso técnico, las empresas que no obtienen incrementos de productividad mediante la adopción de tecnologías económicamente más eficientes son expulsadas del mercado por sus competidoras más dinámicas. Sin embargo, esta expulsión no se produce si el organismo de intervención garantiza precios que permiten seguir cubriendo, por lo menos, los costes variables a las empresas menos innovadoras.

Evidentemente, la industria en su conjunto será menos competitiva frente al exterior, pero sobrevivirá. A cambio, la economía puede evitar la destrucción de empleo y asegurar el autoabastecimiento, con independencia de las alteraciones de los mercados internacionales.

Es importante recordar que la mayoría de los argumentos en favor de la libertad de comercio y la asignación óptima de recursos a nivel internacional se basan en modelos que entre sus supuestos simplificadores de partida incluyen el pleno empleo de los recursos, hipótesis no realistas en muchos ca-



tos y a veces olvidadas cuando se quieren deducir medidas coherentes de política económica. En particular, la teoría de la protección efectiva exige, entre otros supuestos simplificadores, el pleno empleo en el mercado de productos y factores primarios de producción.

Una protección efectiva positiva basada en un sistema arancelario coherente permite obtener un valor añadido a la industria a precios interiores superior al que obtendría a precios internacionales. Sin embargo, los consumidores pagan un precio superior por el producto al que pagarían en ausencia de aranceles.

Por tanto, puede esperarse que partiendo de una situación de protección comercial frente al exterior, la liberalización permita comprar a precios más baratos a los consumidores, al incrementarse la competencia por el lado de la oferta.

Para los productores, los menores precios significan menos ingresos por unidad de producto y, por tanto, un estrechamiento de los excedentes de explotación, que en cierto número de empresas llevan a la obtención de pérdidas.

En el largo plazo, estas empresas parecen abocadas a la desaparición (1). Sin embargo, fórmulas como el trabajo a tiempo parcial, el trabajo familiar, la implantación de sistemas de protección social, y las asociaciones de productores en fórmulas de economía social han venido alargando, de hecho, este proceso de reestructuración. Las crisis industriales y la falta de alternativas de empleo de los recursos humanos han dificultado gravemente los trasvases de activos, incluso, en las economías más avanzadas.

En la CE, la política de precios agrarios ha sido la principal política económica, y en la actualidad continúa siéndolo, si se mide por el volumen de gasto comunitario presupuestado a repercusiones internacio-

nales de la PAC (Josling, 1981, 1991a, 1991b; Reig, 1986; Miller, 1987), el crecimiento de los excedentes invendibles de determinados productos y las dificultades para seguir financiando el crecimiento de los gastos generados, entre otros factores, llevaron a proponer una reforma de la PAC más receptiva a las críticas sobre los efectos redistributivos perversos que se estaban generando a raíz del intento de alcanzar los objetivos del artículo 39 del Tratado de Roma.

Los argumentos manejados en el mundo académico sobre la conveniencia de introducir reformas estructurales y diferenciar entre medidas de redistribución de la renta, modernización de las estructuras productivas, protección del medio natural y desarrollo de zonas especialmente desfavorecidas comenzaron a ser discutidos para elaborar una PAC reformada. El resultado ha sido una mayor atención al papel de las ayudas directas.

Las ayudas directas a la agricultura

Las ayudas directas permiten dirigir el gasto hacia aquellos agricultores que se quiere beneficiar por razones de justicia equitativa en la redistribución de la renta. El argumento se refuerza si se admite que las explotaciones más dinámicas son las principales responsables del incremento de los excedentes agrarios y, por tanto, de la desestabilización de los mercados mundiales. Además, al utilizar técnicas intensivas en insumos químicos y energía fósil representan o pueden representar una amenaza para la conservación del medio natural en su afán productivista.

El documento del Comisario Europeo Mac Sharry popularizó este argumento señalando que el 80 por 100 del gasto del FEOGA era absorbido por el 20 por 100 de las explotaciones agrarias de la CE.

Simplificando los argumentos, puede decirse que los «pequeños agricultores» se convierten en los más legitimados para recibir ayudas públicas, y en cuanto supuestos utilizadores de técnicas «tradicionales», se les identifica como los mejores agentes para la defensa del paisaje milenario y del medio natural en general en las zonas rurales.

Las ayudas directas tienen la ventaja de permitir separar el sostenimiento de rentas de las cantidades producidas y, por esta vía, cortar simultáneamente el incremento del gasto y de los excedentes futuros. Se eliminan así los efectos indeseados sobre los



1) El ritmo de desaparición de empresas agrarias en los países del sur de Europa no resulta fácil de evaluar. Para el caso de España véanse los comentarios críticos del número 54 monográfico de «Agricultura y Sociedad».

mercados internacionales y se liman las asperezas para llegar a acuerdos en el seno del GATT.

El argumento central para defender la amarga medicina del fin de la política de precios altos es que una mayor racionalización del sistema de ayudas permitirá su estabilidad en el largo plazo.

Sin embargo, a la hora de calcular las ayudas directas en los cereales, la CE ha procedido calculando cuáles eran las pérdidas de ingresos por hectárea o por unidad de ganado UGB, y concediendo unas ayudas compensatorias de esa pérdida de ingresos.

El resultado es que el nuevo sistema ha reproducido los mismos vicios acumulados durante años por el anterior sistema de negociación de los precios de garantía, y en la actualidad está en vías de consolidación DEFORMANDO el diseño original de la Comisión, que era más equitativo (Arnalte, 1993).

Como señala Arnalte (1993):

«La única modificación apreciable de aquel statu quo derivará de exención para los pequeños agricultores (productores de menos de 92 toneladas de cereales, cultivadores de menos de 20 hectáreas para los rendimientos medios comunitarios) de retirar del cultivo un 15 por 100 de la superficie, con la consiguiente pérdida de producción, si bien esa pérdida es parcialmente compensada (en las explotaciones a las que se exige la retirada de tierras, es decir, las de dimensión superior a ese umbral) por las ayudas por hectárea también aplicadas a la superficie retirada.

No parece que ese elemento de equidad introducido en la reforma vaya a afectar significativamente a las fuertes desigualdades de renta agraria existentes en Europa.» (pág. 283).

Se puede admitir que, si bien el diseño inicial era tendente a lograr una mayor equidad (y en esto estaríamos de acuerdo con Arnalte, 1993, y G.^o Azcárate, 1992), en el proceso de transformación desde los diseños teóricos de los expertos a los documentos de medidas de política económica se han producido distorsiones significativas.

La más importante de todas ha sido, posiblemente, el hecho de calcular los pagos compensatorios basándose en las pérdidas de ingresos de los agricultores en las futuras campañas por los menores precios de garantía que tendrán al ir aproximándose éstos a los niveles vigentes en los mercados internacionales, en

lugar de utilizar un sistema de primas antiproducción, como el propuesto por Galletto (1993).

De esta forma, los pagos compensatorios medios, por ejemplo para los cereales, se calculan multiplicando el rendimiento medio regional por la cantidad básica. La cantidad básica no es más que la diferencia entre el precio actual de compra de los cereales y el nuevo (e inferior) precio indicativo (2).

De esta forma, se consolidan las desigualdades que venía generando el «antiguo» sistema de precios de garantía. Es más, el sistema en buena medida tiende a fosilizar los desequilibrios al conceder menores ayudas compensatorias a las explotaciones situadas en regiones con menores rendimientos por unidad de superficie (los países mediterráneos, en el caso de los cereales).

Por tanto, la reforma, tal y como se lleva a cabo actualmente, viola los planteamientos de mejora de la equidad, pero, posiblemente, no fuerza tan violentamente el statu quo político vigente en la CE.

En cualquier caso, la introducción de las ayudas directas tiene la ventaja de hacer visibles en los presupuestos comunitarios tanto el volumen de ayudas por producciones como los destinatarios, y en este sentido va a facilitar la identificación de los que podríamos denominar «beneficiarios poliliones», es decir, productores de rentas altas que siguen obteniendo ayudas directas sustanciales. De todas formas, no se puede olvidar que las fuentes de renta no son en muchos casos exclusivamente agrarias, y esto plantea el problema práctico de evaluar las rentas de los agricultores a tiempo parcial y condicionar la obtención de ayudas directas a los perceptores situados en determinados estratos.

En definitiva, esto llevaría el problema de las ayudas directas al terreno fiscal, pues la teoría enseña que en general las medidas fiscales y, más en particular, los impuestos directos sobre la renta son uno de los instrumentos económicos más eficientes para corregir las polarizaciones indeseadas en la distribución de la renta.

((2) Para la campaña 1993-94, en los cereales, la cantidad básica será de 25 ecus/Tm., y el pago compensatorio es igual a esa cantidad multiplicada por el rendimiento medio regional expresado en Tm/Ha. El sistema de pagos compensatorios establecido para las semillas oleaginosas es similar. Véase Moreno, 1993. Gracias a las devaluaciones de la peseta en 1993, el ecu verde ha pasado de 140 a 190 pesetas, suponiendo una mejora sustancial e inesperada para los agricultores españoles, similar a la que disfrutaron los de los restantes países que devaluaron durante la campaña.

Combinaciones de ayudas directas y sostenimiento de precios

Para entender el origen de esta terminología, utilizada durante la negociación agraria del GATT, y el diferente significado del Subsidio Equivalente al Productor (SEP) y la Unidad de Medida de Apoyo (UMA) es preciso recordar primero que:

1. El SEP puede definirse como el montante que debería transferirse a los agricultores para compensar la pérdida de ingresos que resultaría de suprimir una medida gubernamental dada. Por tanto, incluye todas las transferencias que reciben los productores, ya sean pagadas por éstos o por los consumidores en forma de apoyo a los precios de mercado, pagos directos y otros apoyos.

2. La UMA se aparta del SEP en que, por un lado, sólo recoge aquellas medidas que más directamente influyen sobre las decisiones de los productores agrarios (sostenimiento de precios, pagos directos, subvenciones a los inputs, gravámenes de corresponsabilidad, etc.), pero quedan excluidas las ayudas del FEOGA-Orientación, daños catastróficos, servicios generales y los pagos por abandono temporal de tierras (set-aside). Por otro lado, el precio de referencia internacional (trienio base) empleado para comparar con el precio interior, en el cálculo de la UMA, se mantiene fijo en el tiempo para que la medida de apoyo a la agricultura no dependa de las fluctuaciones de los precios internacionales.

3. Equivalente de Subvención al Consumo (SEC): si es negativo, mide el impuesto global implícito soportado por el consumidor y determinado por las políticas agrarias (véase cuadro 1). Sus componentes principales son las transferencias de mercado debidas al sostenimiento de precios, pero incluye también otras transferencias (3).

Se puede contrastar así cuantitativamente la falta de coherencia entre las declaraciones políticas y las realidades económicas. Usando los datos de la OCDE se contrasta que la composición del apoyo a la agricultura en los países de la organización se hace fundamentalmente mediante políticas de intervención en los precios de mercado. Además:

«Asimismo, se pone en evidencia que con carácter general este nivel de apoyo no se ha reducido en los últimos años, a pesar de las reiteradas declaraciones políticas en contra y de las negociaciones en curso para la finalización de la Ronda Uruguay del GATT en materia de agricultura. De este modo, la Comunidad Europea mantiene su nivel de apoyo con un 47 por 100 del SEP y un

40 por 100 de SEC, al tiempo que Estados Unidos lo hace con un 28 y un 19 por 100, respectivamente» (G. Regidor, 1993).

Durante 1993, el nivel de apoyo a los precios de mercado de la Comunidad se sitúa un punto más alto que el año anterior (en el 48 por 100 medido en SEP y 1,2 puntos más alto si se mide como SEC), básicamente por la tormenta monetaria que desarboló el SME y más que compensó las medidas de reforma de la PAC.

Según los datos provisionales de la OCDE (1994) para 1993, la SEC se sitúa en el 34 por 100 para el conjunto de países de la organización, sin variación respecto del año anterior. Por tanto, el nivel de protección estaba estabilizado. Pero durante 1979-86, que es el período de referencia, el SEC del conjunto de la OCDE era de «sólo» un 26 por 100.

Sin embargo, es preciso destacar que la combinación de medidas de apoyo a la producción es diferente, con mayor peso de la política de precios frente a las ayudas directas (indemnización compensatoria [deficiency payments] y similares) y otros apoyos (medios de producción, estructuras, fiscalidad, etc.) en la mayoría de los países de la OCDE.

Pero incluso dentro de las primeras potencias industriales, las diferencias son significativas, especialmente si se compara el caso de Japón y la CE frente a EE.UU.

En la CE, la intervención en precios agrarios supera el 75 por 100 de la SEP total (4), siendo el resto pagos directos y otros apoyos. En Japón, la intervención en precios agrarios supera el 85 por 100 de la SEP total (5), siendo el resto pagos directos y otros apoyos.

Por el contrario, en EE.UU., la intervención en precios en los mercados agrarios se sitúa alrededor del

(4) La SEP total de la CE es del 48 por 100 en 1993 (37% en 1979-86), según datos de Secretariado de la OCDE, que calcula en un 42 por 100 en 1993 (41% en 1992) a SEP del conjunto de países de la OCDE. Es preciso recordar que, como los propios autores del trabajo reconocen, el cálculo de estos indicadores, por el procedimiento empleado, discrimina acentuando la protección vía precios y en cubriendo la realizada por otros caminos.

(5) La SEP total de Japón fue del 70 por 100 en 1993 (71% en 1992), según datos provisionales del Secretariado de la OCDE. En Estados Unidos, aunque con un nivel bajo, también aumentó del 21 (1992) al 23 por 100 (1993). Hay que tener en cuenta que las perturbaciones monetarias afectarán al tipo de cambio del dólar (que se devaluó en 1993) respecto al ecu, y en general todas las monedas se devaluaron frente al yen. Esto afecta a las medidas de PSE y SEC. Por ejemplo, el SEP de la OCDE aumentó, medido en ecus, entre el 92 y el 93 (de 130 a 139 m.m. de ecus), pero disminuyó en dólares (de 168 a 163 m.m. de dólares) en el mismo periodo. Esto muestra como las oscilaciones del tipo de cambio pueden amplificar o atenuar las variaciones del nivel de producción.

(3) Para detalles de la metodología del cálculo de estos indicadores y su reciente evolución véase OCDE: «Agricultural Policies, Markets and Trade». París, 1994.

23 por 100 de la SEP total (6), siendo el resto pagos directos y otros apoyos.

El resto de los países tienen niveles de SEP total neta inferiores. Dentro de este grupo se diferencia claramente el grupo de grandes exportadores de Oceanía, con niveles muy bajos de protección y basada fundamentalmente en otras medidas de apoyo (financiación privilegiada, medidas estructurales, etc.). Este es el caso de Australia, donde la SEP total es sólo del 9 por 100 en 1993 (10% en 1992), y menos del 55 por 100 se realiza mediante apoyo a los precios (véase el gráfico 1). Al ser una agricultura de exportación, el esquema de ayudas agropecuarias (ovino, granos y frutas) (Miller, 1987) sigue una pauta diametralmente opuesta a la de la CE.

Conclusiones

1. Existe una notable distancia entre las proposiciones de regulación y apoyo a la agricultura, tal y como se describe en los medios académicos y técnicos, frente a su traducción en medidas de política económica. Esta «traicionera traducción» es parcialmente responsable de las consecuencias indeseadas que luego aparecen de forma progresivamente más patente (excedentes, descontrol del gasto de los programas, desestabilización del mercado mundial, deterioro de la capacidad financiera de los países exportadores, etc.).

2. En la polémica sobre ayudas directas frente a políticas de precios es preciso distinguir el plano puramente teórico (racionalidad, eficiencia, equidad y bienestar social) del de las aplicaciones. En este nivel lo que realmente existe (como ya sabíamos y la OCDE cuantifica) son diferentes combinaciones de apoyo a los precios, con pagos directos y otras ayudas. Es por tanto un problema de grados.

3. Las ayudas directas, si bien tienen la ventaja de ser menos contradictorias con la normativa del GATT y menos desequilibradoras para los mercados mundiales, tienen también problemas específicos de aplicación. En particular, pueden generar gastos ineficientes y no equitativos, ya que la identificación del beneficiario es siempre complicada (y a veces se sufre con discrecionalidad política). Tampoco están exentas de las perturbaciones monetarias y de las derivadas del ciclo presupuestario.

(6) La SEP total de EE.UU. fue de 28 m.m. de dólares en 1993 (25 m.m. en 1992), según datos del Secretariado de la OCDE.

Actualmente, parece que existen dificultades para llevar a cabo diseños de ingeniería financiera que permitan desarrollar productos adecuados a las necesidades financieras de las explotaciones. En este aspecto, las ayudas directas tienen un amplio campo de desarrollo.

Por último, no puede dejarse de destacar que la experiencia reciente ha mostrado que las alteraciones de los tipos de cambio que generan las tormentas monetarias pueden tener efectos más rápidos y amplios que las reformas arancelarias y comerciales fatigosamente negociadas. ♦

Bibliografía

- Arnalte, E. (1993): «Las ayudas directas. Una nueva forma de protección para la agricultura europea». *El Economista*, n.º 55, pp. 282-285.
- Galleto (1993): «Una política de primas antiproducción: Análisis de un instrumento para suavizar las repercusiones en las explotaciones agrarias del ajuste del mercado». *Revista de Estudios Agro-Sociales*, n.º 165, pp. 133-154.
- García Azcárate, T. (1992): «En torno a la reforma de la PAC: Contribución a un debate necesario». *Revista de Estudios Agro-Sociales*, n.º 161, pp. 149-167.
- González Regidor, J. (1993): «Sistemas de protección a la agricultura en los países de la OCDE: Un comentario crítico». *El Boletín*, n.º 5, pp. 14-20.
- Grandal, M.ª D. (1986): «Mecanismos de formación de expectativas en mercados con retardo fijo de oferta: El mercado de la patata en España». Banco de España. *Estudios Económicos*, n.º 41, Madrid.
- Josling, T. (1981): «World Food Production, Consumption and International Trade: Implication for US Agriculture», en D.G. Johnson (ed.), *Food and Agricultural Policy for the 1980's*. American Enterprise Institute for Public Policy Research.
- Josling, T. (1991a): «Agricultural Policy Reform in the US and the EC». Mimeo. UIMP, Valencia.
- Josling, T. (1991b): «Agriculture in the Uruguay round. The Current State of Play». Mimeo. UIMP, Valencia.
- Miller, G. (1987): «The Political Economy of International Agricultural Policy Reform». AGPS, Canberra.
- Moreno, C. (1993): «Nuevas orientaciones en política agraria: De la reforma de la PAC al acuerdo del GATT». *El Economista*, n.º 55, pp. 276-291.
- OCDE (1994): «Agricultural Policies, Markets and Trade». París.
- Reig, E. (1986): «La política agraria de la Comunidad Económica Europea: Repercusiones internacionales». Edicions Alfons El Magnànim, Valencia.
- Ritson, C. (1977): «Agricultural Economics. Principles and Policy». Granada, Londres.

